



RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Boletín N° 12100-07

RESEÑA LEGISLATIVA
es una publicación de LIBERTAD Y DESARROLLO

DIRECTOR RESPONSABLE:

Luis Larraín A.

EDITOR: Pablo Kangiser G.

DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago, Chile.

1371
14 MARZO 2019

RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

1371

14 MARZO 2019

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Boletín 12100-07

ÍNDICE

I DESCRIPCIÓN	3
II OPINIÓN EJECUTIVA	4
III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	11
V HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY	19

I DESCRIPCIÓN

BOLETÍN 12100-07

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

REFERENCIA

Modifica la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública

INICIATIVA

Mensaje presidencial

ORIGEN

Cámara de Diputados

MINISTERIOS

Del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos y Secretaría General de la Presidencia

INGRESO

12 de septiembre de 2018

ARTICULADO

Quince artículos permanentes y cuatro transitorios; los artículos permanentes modifican los siguientes cuerpos legales: la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública; la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Ministerio Público; la LOC del Tribunal Calificador de Elecciones; la Corporación Administrativa del Poder Judicial; la LOC del Tribunal Constitucional; la LOC del Servicio Electoral; la Ley -de rango orgánico constitucional- de la Contraloría General de la República; la LOC del Banco Central; la LOC del Congreso Nacional; la Ley sobre personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro; la Ley de la Secretaría General de la Presidencia; la Ley General de Bancos, y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

II OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

**EN LÍNEAS GENERALES
ESTE PROYECTO DE LEY
VIENE A FORTALECER
Y AUMENTAR LOS
ESTÁNDARES DE
TRANSPARENCIA EN
EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA A
FIN DE GARANTIZAR DE
FORMA MÁS EFECTIVA
EL EJERCICIO DE ESTE
PRINCIPIO Y EL DERECHO
DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN.**

La transparencia en la gestión pública es uno de los puntos claves para combatir la corrupción entendida como aquellas conductas de funcionarios públicos que favorecen los intereses particulares por sobre los intereses públicos o de la comunidad en general¹, como así también para combatir el tráfico de influencias y fortalecer la democracia. De ahí radica la importancia de este proyecto.

En líneas generales este proyecto de ley viene a fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública a fin de garantizar de forma más efectiva el ejercicio de este principio y el derecho de acceso a la información. Para ello modifica la Ley N° 20.285 y consecuentemente, entre otros cuerpos legales, con el objeto de modernizarlos y perfeccionarlos en aquellos aspectos que con el devenir de los años han mostrado falencias o vacíos.

La modificación propuesta amplía la aplicación de esta ley a más órganos y entidades; se mejora el acceso y gestión de la información por medio del Portal de la Transparencia; dota a la Contraloría General de la República de nuevas facultades fiscalizadoras con lo que se mejora el control a los órganos del Estado; contempla la creación de una Comisión para la Transparencia además de Direcciones de Transparencia en los órganos del Estado a que se refiere la iniciativa, buscando velar por el cumplimiento de sus disposiciones. Asimismo crea nuevas obligaciones de transparencia activa y fiscal; robustece las sanciones administrativas; mejora el procedimiento de reclamación y amparo, entre otros puntos.

En términos generales, se trata de una iniciativa positiva que contempla modificaciones que están acordes con las necesidades actuales de nuestro país, al ser la transparencia un tema importante para el buen desenvolvimiento de nuestra democracia, logrando una mayor y más efectiva participación ciudadana y que finalmente nos lleve a una cultura de transparencia garantizando las libertades individuales y respecto a los derechos concordantes de un Estado de Derecho moderno. Lo anterior, sin perjuicio de algunos aspectos que a nuestro juicio ameritan una revisión.

1. Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG) Documento Técnico N° 96 Disponible en: <http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/DT-96-INFRACCIONES-ADMINISTRATIVAS-V.01.pdf> [Última consulta: 24 de enero, 2019].

III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

El contenido de la iniciativa legal se resume en las materias siguientes:

1) Extensión de la aplicación de la Ley 20.285 a otros órganos del Estado

→ El proyecto de ley incorpora a las corporaciones y asociaciones municipales como órganos sujetos a la aplicación de la ley.

→ También a los siguientes entes autónomos: Congreso Nacional, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República y Banco Central.

2) Se introduce, en los organismos precedentemente indicados, un régimen de transparencia que consta de los siguientes elementos y normas esenciales:

→ Aplicación del principio de transparencia en el ejercicio de sus respectivas funciones, incluyendo obligaciones de transparencia activa, esto es, la información que de oficio los organismos deben poner a disposición de la ciudadanía.

→ Se crea en cada uno una Dirección de Transparencia, para velar por este principio y aplicarlo, compuesta por tres directores, uno de los cuales debe ser abogado y deberá presidirla, que tendrá voto decisivo cuando sesionare con el quórum mínimo de solo dos directores; durarán seis años en sus cargos; se establecen las inhabilidades, incompatibilidades y requisitos para el cargo de director; se los obliga expresamente a

efectuar declaración de intereses y patrimonio; tendrán obligación de reserva de los antecedentes, cuando ello corresponda por una causa legal o por afectación a derechos de terceros; se les establece un mecanismo de remoción y una dieta de aproximadamente \$420.000 por sesión con un límite de dos sesiones por mes (30 UF). La forma de elección o nombramiento de sus miembros se ajusta a la organización de cada organismo y, en general, se eligen de distinta manera el presidente, con mayor incidencia del mismo organismo, y los otros dos directores, que incluso son, en algunos casos, con participación del Sistema de Alta Dirección Pública.

→ Se detalla el procedimiento para recabar información en el respectivo organismo, por

parte de la ciudadanía, incluyendo los plazos para entregar la información, y recursos ante la Dirección de Transparencia en caso de incumplimiento.

→ Se establece el plazo de cinco días hábiles para derivar una solicitud de acceso a la información, desde un órgano incompetente al competente, promoviendo así la eficiencia de los órganos de la Administración del Estado.

En caso de derivación, el plazo de 20 días hábiles para responder comienza una vez que el órgano competente recibe la derivación de solicitud de acceso a la información y, si es que se ha requerido al solicitante subsanar la solicitud, el plazo comenzaría a correr una vez subsanada la falta.

→ Las copias de los actos y documentos por parte del órgano pueden ser entregadas por medios electrónicos o bien de manera presencial. Si la información que fue requerida contempla datos personales y el solicitante declara y comprueba ser su titular, la entrega procederá por medios electrónicos si así se solicitó. Si no, procederá la entrega presencial y

quien la efectuó deberá verificar que la información sea retirada por el titular o su apoderado.

→ Se regula el derecho de oposición de terceros. Si la entrega de documentos o su copia puede afectar derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, tiene un plazo de cinco días hábiles (actualmente es de dos días) para que mediante carta certificada se notifique a la o las personas a la que se refiere la información solicitada. Los terceros tendrán un plazo de diez días hábiles desde la notificación para ejercer el derecho de oposición el cual se deberá presentar por escrito y con expresión de causa.

→ No obstante, se podrá omitir la notificación por carta certificada de posible afectación en dos supuestos: el primero, si el órgano acredita que la información solicitada es secreta o reservada de acuerdo a una ley de quórum calificado y, el segundo, cuando la solicitud esté referida a datos de un elevado número de personas o si la información pudiese afectar a una persona cuyo paradero fuese ignorado.

3) Se precisan nuevas obligaciones de transparencia activa y fiscal

TRANSPARENCIA ACTIVA: A FIN DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA ACTIVA SE DISPONEN DOS NUEVAS OBLIGACIONES. EN PRIMER LUGAR, PUBLICAR LA REMUNERACIÓN DE PERSONAL SUJETO A CONTRATO DE TRABAJO CONFORME AL CÓDIGO DEL TRABAJO Y, EN SEGUNDO LUGAR, EL DEBER DE PUBLICAR LAS MATERIAS RESPECTO DE LAS CUALES SE VERSARON SOLICITUDES EN EL AÑO ANTERIOR Y SEÑALAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACCEDIÓ SU ENTREGA.

→ Transparencia activa: a fin de fortalecer la transparencia activa se disponen dos nuevas obligaciones. En primer lugar, publicar la remuneración de personal sujeto a contrato de trabajo conforme al Código del Trabajo y, en segundo lugar, el deber de publicar las materias respecto de las cuales se versaron solicitudes en el año anterior y señalar el acto administrativo que accedió su entrega.

→ Transparencia fiscal: los sujetos obligados deberán mantener a disposición permanente del público antecedentes actualizados relativos a supuestos y previsiones económicas.

4) Materias relacionadas con la modernización del Consejo para la Transparencia -también referido como CPLT en este documento- (creado en el Título V de la Ley 20.285) y con el procedimiento de amparo



Se contemplan mejoras en procedimiento de reclamo o amparo ante el Consejo de la Transparencia:

■ Se agrega un art. 24 bis en que el Consejo podrá promover instancias alternativas de solución de conflicto entre el solicitante, el órgano requerido y el tercero involucrado, al presentarse un reclamo o amparo. En caso de no llegarse a una solución y que las partes hayan entregado información o vertido opiniones, estas no se considerarán como prueba y tampoco los pronunciamientos hechos por el Consejo en esta instancia lo inhabilitarán para resolver, en definitiva.

■ Las notificaciones se podrán realizar vía correo electrónico cuando el peticionario lo haya expresado en la solicitud o en el amparo. En el caso de los órganos del Estado bastará con la dirección que se haya previamente señalado para estos efectos.

■ Se incorpora la facultad de las partes, a pedir en forma fundada y preventiva que ciertos actos y documentos sean declarados secretos, mientras se encuentre pendiente la decisión del Consejo para la Transparencia, el cual deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para mantener el carácter de secreto de dicha información.

■ Se amplía el plazo para resolver el reclamo de cinco días hábiles a veinticinco hábiles, el cual será prorrogable una sola vez por 30 días corridos por resolución fundada del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia.

■ Respecto del reclamo de ilegalidad, admitido este a tramitación, la Corte de Apelaciones por la vía que estime más rápida y efectiva, ordenará que contra quien se interponga el reclamo o que en su concepto tenga la calidad de interesado en su resolución, informe,

presentando sus descargo u observaciones en el plazo de diez días y remitan a la Corte los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del reclamo.

■ Si una solicitud de información no reúne los requisitos legales o fuere ofensiva, manifiestamente improcedente, incluyera acusaciones de cualquier tipo o juicios de valor respecto de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, situación que será calificada de manera fundada por la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, se requerirá al solicitante que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la respectiva notificación, subsane la falta de los requisitos señalados precedentemente o enmiende los términos de la solicitud formulada, con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. En todo caso, si el requerimiento de subsanación fuere infundado y el órgano no admitiere a tramitación la solicitud, el solicitante siempre podrá recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia.



El presidente del Consejo anualmente deberá dar cuenta pública participativa a la ciudadanía por la gestión. Será enviada al Presidente de la República y al Congreso Nacional como máximo en el mes de mayo de cada año. Si respecto de esta cuenta se realizan ob-

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
ANUALMENTE DEBERÁ DAR CUENTA
PÚBLICA PARTICIPATIVA A LA CIUDADANÍA
POR LA GESTIÓN. SERÁ ENVIADA AL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL
CONGRESO NACIONAL COMO MÁXIMO EN
EL MES DE MAYO DE CADA AÑO.**

servaciones, planteamientos o consultas, el Consejo deberá responder dentro de un plazo no superior a 30 días hábiles respecto de aquellas que fueron efectuadas hasta dos meses después del envío de esta.

→ El Consejo deberá establecer un consejo de la sociedad civil de carácter consultivo que estará conformado de manera diversa, representativa y

pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del Consejo para la Transparencia.

→ En toda modificación del o los reglamentos dictados para la aplicación de la ley, deberá ser oído el Consejo Directivo.

5) Aumento de las sanciones

→ En el supuesto de denegación infundada del acceso de la información por parte de un organismo del Estado, se aplica la sanción de censura o multa de hasta un 50% de remuneración (actualmente es del 20 al 50%). Adicionalmente se agregan criterios para determinar las sanciones específicas, como la intención en la comisión de la infracción, el grado de participación en el hecho, acción u omisión y la conducta anterior del infractor.

→ Respecto de la no entrega oportuna, se establece la misma sanción y criterios a considerar para su determinación, es decir, se aplica la sanción de censura o multa de hasta un 50% de remuneración considerando los mismos tres criterios descritos anteriormente.

→ En cuanto al incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa y de las demás normas vigentes, se aplicará la misma sanción y criterios anteriores.

EN EL SUPUESTO DE DENEGACIÓN INFUNDADA DEL ACCESO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE UN ORGANISMO DEL ESTADO, SE APLICA LA SANCIÓN DE CENSURA O MULTA DE HASTA UN 50% DE REMUNERACIÓN.

→ En caso de persistencia por parte la autoridad o funcionario, una vez notificada la resolución que ordene la entrega de la información en la forma decretada, y habiendo sido aplicada alguna de las sanciones anteriores, el Consejo o la autoridad competente, de oficio o a petición fundada de cualquier interesado, deberá apercibir al infractor por medio de carta certificada dentro del plazo de 10 días. Si luego de este apercibiéndose se mantuviese el incumplimiento, se considerará una falta grave al principio de probidad administrativa.

6) Creación de la Comisión de Transparencia del Estado

→ Esta Comisión tendrá por finalidad velar por una correcta y adecuada implementación y aplicación de esta ley. Servirá de instancia de coordinación para determinar los lineamientos generales del desarrollo, funcionamiento e implementación del Portal de Transparencia.

→ Integrantes de la Comisión: estará integrada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, en representación del Presidente de la República, quien presidirá; por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente Corte Suprema, el

Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el Presidente del Tribunal calificador de Elecciones, el Contralor General de la República, el Presidente del Banco Central y, el Ministro de Justicia y Derecho Humanos, quien actuará como Secretario Ejecutivo.

→ Sus integrantes no recibirán remuneración por el desempeño de sus funciones y, en caso de ausencia o impedimento, serán reemplazados por su subrogante legal. Si esta ausencia o impedimento es respecto del Ministro Secretario General de la Presidencia, ejercerá las funciones de presidente de la

Comisión el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, oportunidad en la que actuará como Secretario Ejecutivo, el Subsecretario General de la Presidencia.

→ El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos proporcionará el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de las funciones propias de la Comisión y para la realización de los concursos públicos que la ley determine.

→ La Comisión deberá, anualmente, dar cuenta pública participativa a la ciudadanía del estado de su gestión.

7) Creación sitio web Portal de Transparencia del Estado

→ Función: consiste en un sitio que almacenará y publicará los documentos y antecedentes determinados por la ley, pudiéndose presentar y tramitar las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante los órganos de la Administración del Estado.

→ Finalidad: tiene la finalidad de facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia activa y el acceso a la información.

→ Todos los órganos a los cuales se les hace aplicable esta ley deberán utilizar las herramientas

de este sitio e interoperarán con éste la información contenida en sus sitios web.

→ La implementación y administración del Portal estará a cargo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

→ Su operación comenzará dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley y los órganos deberán comenzar a interoperar con el Portal dentro del plazo de seis meses desde que comience a operar.

8) Nuevas atribuciones a la Contraloría General

→ Se otorga a la Contraloría General de la República facultades para que, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras establecidas en su Ley Orgánica constitucional, pueda acceder a las operaciones bancarias sujetas a reserva o secreto de todos los órganos de la Administración del Estado sujetos a su control.

→ La Contraloría deberá remitir una solicitud a la entidad bancaria correspondiente, la cual deberá ser fundada, tendrá el carácter de reservada y será notificada al banco por carta certificada.

→ La entidad bancaria deberá mantener en reserva el requerimiento, no pudiendo comunicar al titu-

lar de este hecho, como tampoco de la existencia o el contenido de la solicitud.

➔ Los antecedentes requeridos deberán ser entregados a la Contraloría dentro del plazo de diez días hábiles bancarios una vez notificada la solicitud. El plazo puede prorrogarse por diez días hábiles bancarios cuando la naturaleza, antigüedad o volumen de la información solicitada así lo justificare. La omisión total o parcial en la entrega de dichos antecedentes, podrá ser sancionada por la Comisión.

SE OTORGA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES FISCALIZADORAS ESTABLECIDAS EN SU LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL, PUEDA ACCEDER A LAS OPERACIONES BANCARIAS SUJETAS A RESERVA O SECRETO DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUJETOS A SU CONTROL.

9) Respecto de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, que perciban aportes estatales de más de 70 millones de pesos, que representen al menos un tercio del presupuesto del año anterior, se establece un conjunto de medidas, de modo que deban transparentar la siguiente información que a continuación se resume:

1. Marco normativo aplicable.
2. Una memoria anual de sus actividades.
3. El organigrama de la entidad.
4. El presupuesto de la entidad y el porcentaje de dicho presupuesto que corresponde a los montos recibidos mediante transferencias de fondos públicos.

➔ Adicionalmente, se establece similar obligación respecto de las personas jurídicas sin fines de lucro que recibieren fondos de acuerdo con la ley sobre personas jurídicas receptoras de fondos del Estado (N°19.862), por más de 200 UTM (unos 10 millones de pesos) en el año anterior.

IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

El libre acceso a las fuentes públicas de información es un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa² y se entiende como la posibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de la administración del Estado y de la documentación que sustenta tales actos. En nuestra Constitución no se garantiza de forma expresa, sino que de forma implícita³ puede entenderse derivado de lo dispuesto en el artículo 8 y en el 19 N° 12 sobre libertad de opinión.

Antecedentes Generales

La importancia que desde hace algunas décadas la ciudadanía le ha dado a la transparencia y a la probidad estatal, ha hecho que el Estado deba modificar su ordenamiento jurídico a fin de respetar garantías y derechos.

Fue así como en 1994 se crea la Comisión de Ética Pública por Decreto Supremo 423, de Interior, como una “instancia de estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, contribuyendo a perfeccionar la democracia, refuercen

los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública”. Se señaló, además, que “se entiende por actividad pública no solo aquellas que realiza el personal que forma parte de los órganos de la administración del Estado, sino también la que efectúan los privados y que incida o afecte directamente la transparencia ética de dichos órganos” (artículo 1°).

LA IMPORTANCIA QUE DESDE
HACE ALGUNAS DÉCADAS LA
CIUDADANÍA LE HA DADO A LA
TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD
ESTATAL, HA HECHO QUE EL
ESTADO DEBA MODIFICAR SU
ORDENAMIENTO JURÍDICO A
FIN DE RESPETAR GARANTÍAS Y
DERECHOS.

2. <http://www.unesco.org/new/es/sanjose/communication-information/free-and-universal-access-to-information/> [Última consulta: 24 de enero, 2019].

3. Fallos Rol N° 226/1995, Rol N° 634/2007 Tribunal Constitucional

En 1999 se dicta la Ley 19.653 que dispuso hacer aplicable el principio de probidad pública a todos los órganos de Administración del Estado, para lo cual se introdujo un nuevo artículo 11 bis en la Ley 18.757 (actualmente artículo 13): “Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. Esta norma fue objeto de un reglamento de ejecución⁴.

Un importante avance se produce en el año 2005 cuando se aprueba una reforma constitucional que introdujo un nuevo artículo 8° en nuestra Carta Fundamental y consagró de forma explícita el principio de probidad. Además, se incorporó el principio de transparencia que, como ha señalado la doctrina, la probidad no puede ser considerada como tal si no se la asocia a la transparencia⁵ y por la importancia de estos principios se elevaron a nivel constitucional (reforma constitucional aprobada por Ley 20.050 de 26 de agosto de 2005). Este fue uno de los pasos fundamentales para que el Estado chileno fuera actualizando su legislación a fin de cumplir con el ejercicio de este principio y con lineamientos internacionales⁶.

Es importante destacar que el referido nuevo⁷ artículo 8° de la Constitución, junto con establecer el principio de publicidad de los actos y resoluciones del Estado, autoriza que por ley de quórum calificado se puede establecer reserva o secreto cuando “la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la

seguridad de la Nación o el interés nacional”, todas estas excepciones quedaron, entonces, sujetas a calificación por el legislador⁸.

En el año 2008 se dicta la actual Ley 20.285, la cual regula el principio de la transparencia de la función pública, el derecho a acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, el Consejo para la Transparencia, los procedimientos para el ejercicio y amparo del derecho, además de las excepciones a la publicidad de la información. Esta ley concentra la mayor parte de las modificaciones que propone el proyecto en estudio.

Finalmente, y al margen del nivel normativo legal, en el año 2015 se creó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, con el objeto de que emitiera un informe sobre la materia⁹.

Por el dinamismo de la sociedad y luego de 10 años de la entrada en vigencia de la Ley 20.285 se presenta este proyecto para su modificación, y que merece comentarios en sus aspectos principales.

UN IMPORTANTE AVANCE SE PRODUCE EN EL AÑO 2005 CUANDO SE APRUEBA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUJO UN NUEVO ARTÍCULO 8° EN NUESTRA CARTA FUNDAMENTAL Y CONSAGRÓ DE FORMA EXPLÍCITA EL PRINCIPIO DE PROBIDAD. ADEMÁS, SE INCORPORÓ EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE, COMO HA SEÑALADO LA DOCTRINA, LA PROBIDAD NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO TAL SI NO SE LA ASOCIA A LA TRANSPARENCIA.

4. Artículo 1° Decreto 26 (SEGPRES) de 2001: El presente reglamento regula los casos de secreto o reserva aplicables a los actos administrativos y a los documentos y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 11 bis de la ley N° 18.575.

5. VIVANCO MARTÍNEZ ÁNGELA, “Transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del estado: una normativa para Chile”, Revista chilena de Derecho, vol. 35 n° 2, pp. 385, 2008.

6. Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

7. El primitivo artículo 8° de la Constitución de 1980 había sido derogado por la ley 18.825 (17-AGO-1989).

8. El mismo artículo 8°, a partir del año 2010 (ley 20.414), exigió la declaración de intereses y patrimonio para las más altas autoridades del Estado, así como la constitución de un fideicomiso “ciego” en los casos que señale una ley de rango orgánico constitucional.

9. <http://consejoanticorupcion.cl/portfolio-items/resumen-ejecutivo/?portfolioID=1825> (visitado el 31 de enero de 2019).

Ampliación del ámbito de aplicación de la ley

El ámbito de aplicación actual de la ley ya opera respecto de los ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y de los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Con la modificación de la ley se agregan las corporaciones y asociaciones municipales.

En relación a las asociaciones municipales, estas actualmente deben cumplir con las normas de la Ley de Transparencia respecto de su art. 1°, esto es, principio de transparencia, derecho de acceso a la información pública, procedimiento de ejercicio y amparo de este derecho y las excepciones legales debido a que deben cumplir con el art. 39¹⁰ del decreto 1161 del 2011 el cual fue dictado para la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional del Municipalidades. En razón a lo anterior, la modificación hace aplicable la integridad de la ley a estas asociaciones y no solo respecto del art.1.

En relación a las corporaciones municipales, estas son personas jurídicas de derecho privado por lo que ha existido una discusión acerca de si procede la aplicación de la Ley de Transparencia.

Frente a un conflicto, el Consejo para la Transparencia ha establecido que existe esta obligación en la Instrucción General N°4 del Consejo para la Transparencia¹¹, mientras que algunas corporaciones municipales han sostenido que se rigen por el derecho privado, por lo que dicha obligación no les sería aplicable. Frente a esta discrepancia, hay fallos de la Corte de

EN ESTA PARTE EL PROYECTO SE SIGUE UNA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN ENGEL, POR LO CUAL EL CONGRESO NACIONAL, CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SERVICIO ELECTORAL Y TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES SE AJUSTARÁN AHORA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (N°2.285) Y ADEMÁS A SUS RESPECTIVAS LEYES ORGÁNICAS EN MATERIAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Apelaciones que han establecido que sí tienen esta obligación, debido a que la integración de sus órganos de decisión, administración y control es efectuada por autoridades o funcionarios públicos y por la naturaleza de las funciones que desempeñan, esto es, su finalidad orientada al bien común¹².

El proyecto de ley viene a dar solución definitiva a este problema otorgando certeza y descongestionando el aparato judicial al establecer que a estos organismos se les aplica la Ley de Transparencia en su totalidad, dejando atrás opiniones contradictorias, cuestión que por lo demás parece del todo acertada al prevenir además eventuales focos de corrupción.

Respecto de los demás órganos autónomos del Estado, la ley actual señala que se regirán por sus leyes especiales respectivas. El proyecto viene a solucionar una de las deficiencias de la Ley 20.285 que no incluyó estos órganos entre sus disposiciones; así, en esta parte el proyecto se sigue una recomendación de la Comisión

10. Artículo 39.- A las asociaciones municipales les serán aplicables tanto el principio de publicidad de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, como las normas de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N°20.285.

11. Numeral 2 i) "Las corporaciones y fundaciones de derecho privado que presten servicios públicos o realicen actividades de interés público, en la medida que más del cincuenta por ciento de su órgano directivo sea designado por autoridades o funcionarios públicos o esté integrado por éstos determinada información detallada en esta instrucción." Disponible en: http://www.gobiernotransparente.gob.cl/asistente/oficios/instruccion_general_4_ta.pdf [Última consulta: 21 de enero, 2019].

12. Considerando 6° Rol 2961-2009 Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Engel¹³, por lo cual el Congreso Nacional, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones se ajustarán ahora a las disposiciones de la Ley de Transparencia (N° 20.285) y además a sus respectivas Leyes Orgánicas en materias de transparencia y acceso a la información.

La iniciativa da como resultado una normativa sistematizada, dando mayor resguardo y cumplimiento al principio de transparencia y al derecho a la información.

Consejo para la Transparencia y el alcance de su órbita de competencia

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que fue creado por la Ley 20.285 y cuya función radica en velar por el cumplimiento de dicha ley.

Ante este Consejo cualquier persona podrá presentar un reclamo en caso de vulneración a la transparencia activa, en específico por una violación al

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA ES UNA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE FUE CREADO POR LA LEY 20.285 Y CUYA FUNCIÓN RADICA EN VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE DICHA LEY.

art. 7 de la ley o bien, puede presentar un amparo.

En el proyecto se contempla mejorar la norma y adicionar facultades y obligaciones al Consejo para la Transparencia, dentro de ellas, rendir cuenta pública. También se establecen mejoras al procedimiento de reclamación y amparo, pudiendo promover alternativas de solución de conflicto, acogiendo las posibilidades de la tecnología para disponer que las notificaciones se hagan en su mayoría a través de correo electrónico. Asimismo se faculta a las partes para solicitar que sean considerados secretos determinados antecedentes y documentos mientras las decisiones del Consejo para la Transparencia estén pendientes, y se amplía el plazo para dictar sus resoluciones.

Las medidas anteriores van a generar un impacto positivo ya que responden a problemas prácticos que ha tenido la ley desde su aplicación. Ahora bien, respecto de este organismo, ha tenido lugar una discusión en cuanto a si se podría extender su ámbito de fiscalización a los órganos autónomos antes indicados en este documento y, por ende, la competencia que le correspondería al Consejo para la Transparencia para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 20.285 respecto de ellos. Se sostiene que sería contraria a la autonomía constitucional que a estas entidades se les otorga el sujetarlas a la vigilancia del Consejo para la Transparencia en estas materias, lo que ha sido respaldado por fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Sin embargo, existen algunas voces en contrario, las que se han plasmado en el informe del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (también conocido como Comisión Engel), ya referido en este documento. Asimismo, en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional con ocasión del control

13. En esta comisión recomendó "Equiparar y fortalecer las obligaciones que establece la Ley N° 20.285 sobre el derecho de acceso a la información del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de órganos con autonomía constitucional, obligándolos a cumplir con el mismo estándar que se aplica en el Poder Ejecutivo, y extendiendo la competencia del CPLT a todas las instituciones del Estado". Disponible: http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf

preventivo de la Ley de Transparencia, cabe destacar los votos disidentes de los ministros Correa Sutil y Vodanovic, quienes estimaron que en nada se afectaría la autonomía de estos organismos el que el Consejo para la Transparencia velara por el cumplimiento de obligaciones que no son co-sustanciales a las materias que por definición definen su autonomía constitucional. El asunto estaría en reconocer y no afectar en caso alguno el ámbito autónomo de ejercicio de las potestades y competencias propias de las entidades autónomas del Estado y, por lo tanto, la supervisión del Consejo para la Transparencia estaría centrada en las materias de transparencia activa y de derecho de acceso a la información pública en áreas relacionadas con la gestión administrativa y el uso de los recursos públicos de estos organismos. La autonomía constitucional exige que estos órganos estén en condiciones de ejercer sus funciones constitucionales con plena independencia y libres de injerencias de terceros. En esas materias, cualquier sometimiento a la superintendencia de otro poder sería inconstitucional. Sin embargo, y tal y como se señaló en los votos de los Ministros Correa Sutil y Vodanovic en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional antes referido, tal autonomía no equivale a una autarquía absoluta en todas sus decisiones y, ciertamente, no se contrapone a que la Constitución y la ley puedan establecer, dentro de límites, un control inter-órganos, en materias que no sean las propias de su competencia esencial.

Cualquiera sea la postura a seguir, lo cierto es que existe consenso en la doctrina que es necesario equiparar y fortalecer las obligaciones de transparencia para aquellos órganos y poderes del Estado respecto de los cuales hoy la intensidad de la regulación y control es menor, estableciendo mecanismos de garantía de este derecho, así como de fiscalización y sanción, que sean externos a estos órganos autónomos constitucionales y que faciliten su ejercicio por parte de la ciudadanía, equiparando procedimientos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia para los órganos de la administración central y descentralizada.

Actualmente, el CPLT no tiene competencia sobre estos

**CON LA MODIFICACIÓN SE INCLUYE A ESTOS
ÓRGANOS AUTÓNOMOS AL RESGUARDO DE
LA LEY Y SE ESTABLECEN DIRECCIONES DE
TRANSPARENCIA, QUE SON ORGANISMOS
INTERNOS QUE PRESENTES EN CADA ÓRGANO
CON LA FINALIDAD DE VELAR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.**

órganos, por lo que los reclamos serían de competencia de la Corte de Apelaciones. Ello supone tener que recurrir a la justicia ordinaria a fin proteger el derecho de acceso a la información pública, lo que implica un obstáculo para su ejercicio, además de elevar los costos y tiempo que se le debe destinar.

El proyecto opta por crear direcciones especiales de transparencia en cada organismo autónomo para hacerse cargo de esta materia. Entendiendo que la opción por el Consejo de la Transparencia (aun cuando a nuestro juicio disponible en el entendido antes explicado), no ha sido la opción que han tomado los tribunales de justicia ni el Tribunal Constitucional en la materia, el camino que toma el Ejecutivo con esta propuesta se alinea con dicha jurisprudencia y avanza para hacerse cargo del diagnóstico detectado. La propuesta es interesante y apunta al objetivo buscado. No obstante, deberán resolverse en el debate cómo se abordarán los posibles problemas de fragmentación en las decisiones de fondo que esto puede generar, las cuestiones relativas a contar con una legislación sistémica y coordinada, evitando asimismo los potenciales conflictos de interés, cuestión esta última que queda bien resuelta dada la forma de designación de los miembros de las direcciones especiales de transparencia, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se puedan introducir.

CON LA MODIFICACIÓN SE INCLUYE A ESTOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS AL RESGUARDO DE LA LEY Y SE ESTABLECEN DIRECCIONES DE TRANSPARENCIA, QUE SON ORGANISMOS INTERNOS QUE PRESENTES EN CADA ÓRGANO CON LA FINALIDAD DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

Sanciones

La ley actual contempla que en caso que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio del Estado deniegue infundadamente o no entregue de forma oportuna la información solicitada o no dé cumplimiento a las normas de transparencia activa, la sanción será de un 20 a 50% de su remuneración.

La norma propuesta mantiene el máximo de 50% de la remuneración, pero omite el mínimo de 20%; además prevé la medida disciplinaria de la censura y establece tres criterios para determinar la sanción, esto es el grado de intencionalidad, grado o forma de participación en el hecho (acción u omisión) y la conducta anterior del infractor.

La iniciativa responde a una de las críticas formuladas a la Ley 20.285. Para estar en concordancia con el cumplimiento del principio de transparencia y el acceso a la información se hacen necesarias sanciones verdaderamente disuasivas a fin de prevenir conductas que entorpezcan el ejercicio del derecho por parte de la autoridad. En este sentido la eliminación del mínimo de 20% permitirá sanciones inferiores a dicho porcentaje, lo que conspira contra la intención de disuadir al infractor.

En definitiva, con la modificación se establece la medida disciplinaria de la censura y se establecen pautas para

determinar la intensidad de la sanción, pero parece no ser del todo suficiente ya que dentro de las medidas disciplinarias aplicables se deberían contemplar otras del Estatuto Administrativo. Por ejemplo no se contempla una reparación del daño sufrido por aquella persona o entidad que solicite la información y no tenga acceso a ella, cuestión que podría evaluarse.

Respecto de los órganos autónomos, las sanciones serán aplicadas por la autoridad competente y conforme al procedimiento establecido en las disposiciones especiales respectivas.

Creación del Portal de Transparencia

Se trata de un sitio web que almacenará la información que los órganos obligados por esta ley deben publicar. Además, por este medio se podrán presentar y tramitar las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante los órganos de la Administración del Estado.

Este portal es la actualización del Portal Gobierno Transparente, con la diferencia que ahora se le reconoce legalmente y se le adiciona la característica de que los órganos interoperen con el portal la información contenida en sus sitios web.

La Interoperabilidad, según la EIF –*European Interoperability Framework*– es “la capacidad que tienen las organizaciones para interactuar y así lograr metas que las beneficien mutuamente, incluyendo el compartir información y conocimiento entre ellas a través de los procesos de negocio a los que soportan por medio del intercambio de datos entre los sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC o ITC por su sigla en inglés)”¹⁴.

14. Traducción “is the ability of organisations to interact towards mutually beneficial goals, involving the sharing of information and knowledge between these organisations, through the business processes they support, by means of the exchange of data between their ICT systems”. Disponible en https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf [última visita 17 de enero 2018]

En el año 2004 se establece la Agenda Digital con el objetivo de contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público. La Agenda Digital busca poner a las TIC al servicio de estos objetivos nacionales, así como promover la universalización del acceso y la ampliación del uso de las TIC, en especial a través de Internet, por parte de las personas, instituciones y empresas. Con el actual gobierno se impulsó la Agenda Digital 2020¹⁵, la cual promueve un gobierno abierto por medio de datos abiertos y presupuesto abierto con el fin aumentar la transparencia y eficiencia del Estado, haciendo disponible la información en forma proactiva y disminuyendo las solicitudes de transparencia.

Con estas medidas se advierte la preocupación que se tiene por el buen uso de la tecnología y que esta esté al servicio y utilidad de la ciudadanía.

En suma, la interoperabilidad -ausente en el sitio web actual- permitirá una acción más coordinada, generando cooperación en el sector público, agilizando el proceso de búsqueda y minimizando el error en la información o confusión por parte de los usuarios. Por lo que se destaca que esta medida moderniza el sistema de acceso a la información facilitando y haciendo más eficiente la disponibilidad y solicitud de la misma.

Creación de Direcciones de Transparencia y Comisión para la Transparencia

Como ya habíamos señalado, con la dictación de la Ley N° 20.285 no se contemplaron, con igual intensidad en la regulación, los órganos autónomos por los que estos se rigen por sus leyes especiales respecti-

vas sobre asuntos de transparencia. Así, si bien se ha tendido a la transparencia, al final se genera una regulación poco sistémica y dispar ya que poseen diferentes regulaciones y procedimientos distintos entre sí.

Con la modificación se incluye a estos órganos autónomos en el marco de la Ley N° 20.285 y se establecen Direcciones de Transparencia, que son organismos internos que estarán presentes en cada órgano con la finalidad de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El buen uso de estas direcciones propenderá a un mejor funcionamiento de la administración pública, coordinación de los órganos públicos y ayuda a la transparencia activa. Al agregarse estos organismos a la regulación por la Ley de Transparencia, hace lógica una homogeneización en sus respectivas leyes especiales, se crea el mismo organismo para todos, y se genera así un control común, simplificando la organización estatal, por lo que es positiva la propuesta, sin perjuicio de los planteamientos que efectúaramos anteriormente, lo que a nuestro juicio debieran ser discutidos en el debate.

Dado que se hace necesario establecer alguna instancia de coordinación en la aplicación de la ley y sus criterios respecto de la administración central y los organismos autónomos que tendrán direcciones de transparencia independientes entre sí, el proyecto crea la Comisión para la Transparencia, la que tiene como objeto servir de instancia de coordinación de los órganos del Estado, incluyendo a representantes de los organismos autónomos, determinar los lineamientos generales del desarrollo, funcionamiento e implementación del Portal de Transparencia del Estado y velar por la correcta y adecuada implementación y aplicación de la presente ley. La integración de la Comisión por parte de cada uno de los organismos autónomos merece mayor debate pues si el objetivo es contribuir a coordinarse y tender

15. Disponible en: <http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%203%20-%20Noviembre%202015.pdf> [Última consulta: 21 de enero, 2019].

hacia una mayor transparencia, quienes representen a estos organismos en esta Comisión no debiesen tener potenciales conflictos de interés en la materia.

Ahora bien, creación de la Comisión de Transparencia del Estado de Chile no considera al CPLT, que también tiene injerencia en el nombramiento de los integrantes de las Direcciones. El CPLT tiene además una experiencia que pudiese resultar valiosa. En ese sentido o bien podría considerarse que el CPLT lo integre, o bien establecerse una obligación legal de coordinación la Comisión y el Consejo para la Transparencia.

Con todo, ambos organismos responden a una mejor coordinación de la Administración a fin de lograr actuaciones más eficaces y eficientes, logrando un mayor resguardo por el cumplimiento de esta ley, pero debe tener mejoras para no generar problemas en su aplicación, lo cual se solucionaría considerando orgánicamente al CPLT.

Nuevas atribuciones para la Contraloría General de la República

De acuerdo con nuestra Constitución¹⁶ y el Decreto 2.421¹⁷ es atribución de la Contraloría fiscalizar el ingreso e inversión, examinar y juzgar las cuentas de las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de las instituciones sobre las cuales tenga facultades fiscalizadoras.

Respecto del alcance que tiene el secreto bancario se han sostenido dos posiciones: la primera, que no le corresponde a este Ente Contralor requerir directamente a

los bancos comerciales privados la información relativa a las cuentas corrientes cuyos titulares sean servicios u organismos sometidos a la fiscalización de este Órgano, atendido el secreto al que las somete la ley¹⁸ y, la segunda, que dado el carácter público de los recursos manejados en cuentas corrientes abiertas por organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General en bancos privados comerciales, corresponde afirmar que, para el adecuado cumplimiento de su objeto y de las funciones que le encargan tanto la Constitución Política como la ley, este Ente Fiscalizador se encuentra facultado para requerir directamente de los bancos comerciales privados la información relativa a las referidas cuentas¹⁹. Este proyecto de ley viene a solucionar esta divergencia, otorgándole a la Contraloría una ampliación de su esfera de control y fiscalización hacia los órganos de la Administración, al establecer que podrá acceder a operaciones bancarias declaradas en reserva o secreto de todos los órganos de Administración de Estado.

Esta medida así orientada es positiva y viene a reforzar de forma intensa la facultad de fiscalización actual que se le otorga a la Contraloría, permitiendo velar por el correcto ingreso e inversión de los fondos públicos, llevar el control de cuentas de mejor manera, a la vez que constituye un desincentivo a faltas de probidad consistentes en sustracción de recursos públicos.

Personas jurídicas sin fines de lucro que reciben fondos públicos

Las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencia de fondos públicos que, en su conjunto, asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales (unos 70 millones

16. Artículo 98 inc.1° CPR. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

17. Art. 1° "...fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación..."

18. Dictamen N° 3344 Contraloría 2009.

19. Ibidem

de pesos), que sean representativas de, al menos, un tercio de su presupuesto anual del año calendario inmediatamente anterior, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, su marco normativo, su organigrama, una memoria anual y su presupuesto.

Esta obligación se hace extensiva por el proyecto a las entidades inscritas en el Registro de la Ley N°19.862, que establece el registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos²⁰, las que ya tienen la obligación de crear registros institucionales cuando las transferencias estatales que reciban en el año calendario inmediatamente anterior superen las 200 unidades tributarias mensuales (unos 10 millones de pesos).

La iniciativa establece una mejora de forma sustantiva para la fiscalización de que pueden ser objeto estas personas jurídicas, respecto de los fondos estatales que reciben, ampliando la transparencia. La publicación de esta información ayuda a la confianza y transparencia de estos organismos para con la ciudadanía.

Lo que podría generar problemas de interpretación es calcular el tercio del presupuesto anual del calendario inmediatamente anterior, por lo que puede sugerirse que se establezca un monto específico como se hace en el caso de las entidades registradas de acuerdo con la Ley 19.862. De hecho, sería preferible tener un solo mecanismo de control y transparencia, pues no se advierte con claridad la distinta regulación entre las entidades registradas y las que estarán afectas a las normas de transparencia solo a partir de la recepción de fondos públicos por 70 millones que equivalgan a un tercio de su presupuesto.

LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO QUE RECIBAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS QUE, EN SU CONJUNTO, ASCIENDAN A UNA CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR A 1.500 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES (UNOS 70 MILLONES DE PESOS), QUE SEAN REPRESENTATIVAS DE, AL MENOS, UN TERCIO DE SU PRESUPUESTO ANUAL DEL AÑO CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, DEBERÁN MANTENER A DISPOSICIÓN PERMANENTE DEL PÚBLICO, A TRAVÉS DE SUS SITIOS ELECTRÓNICOS, EN FORMA COMPLETA, ACTUALIZADA Y DE UN MODO QUE PERMITA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y UN ACCESO EXPEDITO, SU MARCO NORMATIVO, SU ORGANIGRAMA, UNA MEMORIA ANUAL Y SU PRESUPUESTO.

20. La ley y su reglamento contiene la obligación de crear un Registro Central que recopile y haga pública esta información a quien desee consultarla.

V HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY

ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyecto de ley está disponible en:

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12616&prmBL=12100-07